



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, diecinueve de agosto de dos mil veintidós**

#### **21-303**

Proceso: APELA SENTENCIA  
Demandante: **ESAUL ARIAS FLOREZ**  
Demandado: **COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.**  
Radicado No.: 05001-31-05-018-2020-00139-01.  
Tema: Ineficacia traslado  
Decisión: **MODIFICA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Protección S.A. contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 24** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicita el demandante que tras la declaratoria de **INEFICACIA** del traslado a la administradora del RAIS, se tenga como válidamente afiliado al régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, y en consecuencia se condene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar los aportes realizados, tales como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales, con los rendimientos generados.

##### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EN SÍNTESIS, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 15 de septiembre de 1963.
- ✓ Que hizo su primer aporte al ISS en abril de 1985.
- ✓ Que se trasladó a COLFONDOS en mayo de 1994, bajo la promesa de asesor de que se pensionaría anticipadamente, con una mesada superior y que el RPM se iba a extinguir, añadiendo que se le suministró una información inadecuada, insuficiente y falsa.
- ✓ Que se afilió a PROTECCION S.A en marzo de 1995, fondo en que actualmente permanece.
- ✓ Que ninguna de las administradoras privadas le hizo una proyección pensional en ambos regímenes, ni le explicaron cómo acceder a los servicios que promocionaban.
- ✓ Que no se le brindó re-asesoría pensional antes del cumplimiento a los 52 años de edad.
- ✓ Que Colpensiones resolvió negativamente su solicitud de retorno al RPM por encontrarse a diez años o menos de satisfacer la edad para pensionarse.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido. Inicialmente se pronunció PROTECCIÓN S.A. aclarando que la vinculación fue realizada de manera libre y voluntaria, máxime si los asesores eran capacitados permanentemente y contaban con el conocimiento técnico y la lealtad moral suficiente para orientar a los posibles afiliados sobre todas las condiciones propias del RAIS, brindándole al demandante una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre los aspectos que reseña. COLFONDOS, por su lado, en similares términos, adujo que el traslado se efectuó el 13 de abril de 1994 con fecha de efectividad el 1 de mayo de 1994, y que la información brindada fue suficiente, completa y veraz, sin omitir a la verdad, entregándole información objetiva y comparada con el RPM. Por último, COLPENSIONES aceptó como cierta la fecha de nacimiento del accionante y lo atinente a la solicitud administrativa adelantada ante esa entidad, respecto de los demás hechos señaló que no le constaban al tratarse de circunstancias fácticas ajenas a esa entidad y que debían ser objeto de debate probatorio.

### **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 25 de octubre de 2021, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia de la afiliación al RAIS a través de COLFONDOS y por ende la movilidad realizada entre ésta y PROTECCIÓN S.A., ultimo fondo al que ordenó efectuar el traslado inmediato de todos los valores que hubiese recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, los rendimientos que se hubieren causado, sumas adicionales de

las aseguradoras y cuotas de administración. Igualmente CONDENÓ a COLFONDOS a retornar de manera inmediata a COLPENSIONES el valor de las cuotas de administración causadas entre el 1 de mayo de 1994 y 28 de febrero de 1995.

Finalmente condenó en costas a COLFONDOS y PROTECCION a favor del demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV.

Dentro del término concedido por la ley, el apoderado de Protección interpuso y sustentó el recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. DE LA JUEZ PARA CONDENAR**

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

### **2.2. APELACIÓN PROTECCIÓN**

Se opuso a la devolución de los gastos de administración y sumas adicionales de la aseguradora, exponiendo de que se trataron de comisiones causadas durante la administración de la cuenta de ahorro individual del actor, descuentos realizados conforme la ley como contraprestación de una buena administración, legalmente permitidos.

Sostuvo que con la condena de primera instancia, según la cual debía devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual del actor, más los rendimientos financieros generados y adicionalmente lo descontado por comisión de administración, se estaría constituyendo enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES por recibir una comisión que ni siquiera está destinada a financiar la pensión de vejez y adicionalmente ya se le están trasladando los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, fruto de la buena gestión de la administración realizada por PROTECCIÓN.

De esta forma considera que tiene derecho a conservar dicha comisión como restitución mutua.

Teniendo en cuenta lo anterior adujo que, si la consecuencia de la declaratoria de la nulidad es que las cosas vuelvan al estado anterior, en estricto sentido se producirían unas consecuencias:

1. Que el contrato afiliación nunca existió.
2. Que Protección no debió administrar los recursos de la cuenta ahorro individual.
3. Que esos rendimientos no se causaron.
4. No existió el cobro de una comisión de administración.

Con fundamento en el artículo 1746 del Código Civil que habla de las restituciones mutuas, frutos e intereses y abono de las mejoras, a su criterio de debe entender que aunque se declarara una ineficacia o una nulidad de la afiliación y se hiciera la ficción de que nunca existió el contrato afiliación, no se podía desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras, razón por la cual podía conservar la comisión producto en la buena administración al hacer rentar el patrimonio de la cuenta de ahorro individual del accionante.

Frente al seguro previsional, manifestó que ya fue girado a una aseguradora para que en caso de existir un siniestro de sobrevivencia o invalidez, dicha compañía pagara una suma adicional con el fin de financiar las pensiones por dichos conceptos, resaltando que la mencionada prima ya fue pagada mes a mes a la aseguradora durante todo este tiempo, encontrándose imposibilitada para solicitar una devolución. Agrega que la aseguradora es un tercero de buena fe que nada tuvo que ver entre el acto suscrito entre el demandante y PROTECCIÓN.

Frente a los cobros del 3% destinados a la comisión de administración y seguro previsional, resaltó que sobre estos había operado la prescripción, ya que era conceptos que se iban descontando con la periodicidad del tiempo que imponía la ley, especialmente cuando NO estaban llamados a financiar directamente la prestación de vejez.

## **2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

### **2.3.1. DEMANDANTE**

Tras hacer un recuento de la sentencia de primera instancia manifesto que:

“(…) los fondos privados son entidades con funciones de servicio público a la luz del artículo 48 Superior, se exige de estas un PAPEL ACTIVO en la asesoría que brindan a sus futuros afiliados y más si vienen del Régimen de Prima Media, no en vano el Inciso 3 Literal C Artículo 60 de la Ley 100 de 1993 les impone como OBLIGACIÓN “informar a los afiliados sus derechos y obligaciones de manera tal que les permita la adopción de decisiones

informadas”, luego estas entidades deben detallar plenamente y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al RAIS, lo siguiente:

- 1.Las diferencias de los dos regímenes que existen en Colombia.
- 2.Las proyecciones de las mesadas por vejez que podrían recibir tato en el Régimen de Prima Media como en el RAIS y en diferentes estadios.
- 3.Las implicaciones y conveniencias de optar por uno u otro Régimen.

Debiendo incluso DESANIMAR en el evento en se evidencie que el traslado perjudique su futura prestación.

Al respecto citare las sentencias de la Sala Laboral de la C.S.J. radicados:

33083 del 22 de noviembre del año 2011.

46292 del 3 de septiembre del año 2014.

SL 17595 del 18 de octubre del año 2017.

Ese deber de información a cargo de las administradoras no solo es exigible con la expedición del Decreto 2071 del año 2015, pues ya los artículos 14 y 15 del Decreto 656 del año 1994 exigían de estas cumplir sus funciones con suma diligencia, con prudencia y pericia dentro de las cuales se entienden la transparencia, la vigilancia y el deber de información. Ello según lo ha dicho la jurisprudencia a partir del artículo 1603 del Código Civil que enseña que las partes no solo se comprometen en los contratos al cumplimiento de las obligaciones expresas sino también a las que emanan precisamente de la naturaleza del contrato.

De ahí que siendo los fondos privados los que tienen a cargo de asesorar los futuros afiliados en los términos indicados y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto de los servicios que ofrecen, son estos según las reglas que se extraen de las providencias de la Corte Suprema de Justicia los que en el proceso judicial deben de acreditar que la información dada a la persona que se va a trasladar de Régimen satisface las exigencias legales que se ha reparado.

Por lo que en este proceso honorables magistrados la Administradora de Fondos de Pensiones COLFONDOSS.A.:

- Omitió información al trasladar de Régimen a la demandante.
- La información que le suministraron fue errónea y no se ajustaba a la realidad.
- La información fue incorrecta, inoportuna e insuficiente.

Y como se evidencia en la primera audiencia no obra en el expediente prueba relativa a que en su momento el Fondo de Pensiones COLFONDOSS.A. hubiese brindado al demandante previo a su traslado toda la información en los términos exigidos por la jurisprudencia; Esto es que antes de hacer el traslado le hubiesen indicado que el valor de la pensión de vejez en el RAIS dependía del capital consignado en la cuenta individual, tampoco obra prueba que a la fecha del traslado le hayan efectuado las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia futuro en ambas opciones, pues ellas brillan por su ausencia en el plenario y otras tantas observaciones respecto de los riesgos que asumía él referido con su traslado, como por ejemplo recibir una mesada pensional inferior a la que podía haber recibido en el Régimen de Prima Media.

La única prueba que trae el Fondo privado es el formulario de afiliación, y la Corte Suprema de Justicia a dicho en Sentencia de Tutela radicado 59370 del 6 de mayo del 2020 y la SL 373-2021 Sala de Casación Laboral, que el formulario de afiliación, no corresponde a un registro o constancia de que la AFP, hubiese dado información.

De esta manera las cosas en atención a los lineamientos jurisprudenciales citados y con sustento en las pruebas, se demuestra a todas luces que hubo vicio en el consentimiento del señor ESAUL ARIAS FLÓREZ, cuando le hicieron el traslado al Fondo privado, traducido en un engaño por la falta “DEL DEBER DE INFORMACIÓN”, en un asunto neural como lo es el cambio de Régimen pensional que la indujo en error de hecho sobre el objeto de que se trata, como lo señala el artículo 1510 del Código Civil.

Honorables Magistrados, cuando mi representado se trasladó para el RAIS, lo hizo ignorando las desventajas que le representaba pensionarse en ese régimen, pues si la

Administradora COLFONDOSS.A. le hubiese brindado una información objetiva y adecuada sobre las implicaciones que tendría, nunca habría dado su consentimiento.

Ahora que mi representado, conoce las condiciones reales con las cuales accedería a la pensión en uno y otro régimen, se ve asaltada en su buena fe, pues considera que la información del Fondo Privado fue clara, completa y exacta, faltando la Administradora a su deber de información, donde la ley le impone que debe ser veraz, amplia y suficiente para que el consentimiento sea libre y voluntario.

Para concluir mis alegatos de conclusión respetuosamente honorables magistrados podrán evidenciar en la grabación de la primera audiencia que el señor Juez del Juzgado DIECIOCHO Laboral del Circuito de Medellín, dejó claro en sus argumentos de dicha sentencia que SÍ se evidenciaba la falta de prueba por parte del fondo COLFONDOS S.A. de ese DEBER DE INFORMACIÓN. Por lo que con los argumentos expuestos les solicito de manera respetuosa CONFIRMEN la sentencia de primera instancia y me ratifico en las pretensiones solicitadas en la demanda”

### **2.3.2. ALEGATOS COLPENSIONES**

Solicita se revoque la sentencia de primera instancia. Afirma que el traslado de régimen del demandante y selección del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ocurrió el 29 de abril de 1994, en vigencia del Decreto Ley 663 del 02 de abril de 1993 *“Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración.”*, momento para el cual sólo se exigía a las administradoras, atender el formulario con el lleno de los requisitos que para los efectos preveía la entonces Superintendencia Bancaria, a fin de demostrar la aceptación y consentimiento por parte de un afiliado, de ahí que imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época, constituía una situación de carácter imposible.

Expuso que el entendimiento entre el RPM y el RAIS sugiere que los afiliados sean debidamente asesorados dado que hay aspectos técnicos que los diferencian. Sin embargo, esta regla no puede interpretarse como una situación universal que desplace las situaciones de cada caso particular y que además invierta la carga de la prueba sin mayor análisis que la naturaleza experta que tiene la administradora de pensiones. Este contexto tampoco puede desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad del demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Este último aspecto ha sido por ejemplo evaluado por la Corte Suprema de Justicia tratándose de afiliaciones tacitas donde prevalecen las actividades, cotizaciones y movimientos financieros a lo largo de la vida laboral.

En razón de lo anterior, podemos colegir sin lugar a equivoco que, en lo atinente a la carga de probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico del escrito de demanda, estos deben

de estar a cargo del demandante, pues la AFP cumplió con las atribuciones legales vigentes y aplicables para el momento de la afiliación de la parte actora, y en razón a los principios rectores de equidad y solidaridad, imponerle una carga adicional, más allá del formulario de afiliación, pues con ello se acentuaba el consentimiento y aceptación por el afiliado, sería una carga desproporcionada e imposible de cumplir. Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta la práctica de la prueba decretada en el proceso, se colige del interrogatorio de parte realizado al señor ESAUL ARIAS FLOREZ, que nadie la obligó a efectuar su traslado al Régimen de ahorro individual, sino que lo realizó de manera voluntaria.

Que de confirmarse la sentencia, debe asegurarse que Colpensiones reciba todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del señor ESAUL ARIAS FLOREZ, tales como: (i) cotizaciones, (ii) bonos pensionales, (iii) sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, (iv) cuotas de administración y la indexación de las mismas, (v) el porcentaje de garantía de pensión mínima y (vi) el traslado de los reaseguros y seguros previsionales; tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1689 de 2019; SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, entre otras.

Finalmente solicita se adicione la sentencia en el sentido de ordenar a COLFONDOS trasladar con destino a COLPENSIONES los valores correspondientes a las cuotas de administración, incluyendo sumas adicionales de la aseguradora, el porcentaje de garantía de pensión mínima y el traslado de los reaseguros y seguros previsionales que se causaron durante el periodo que el demandante estuvo afiliado a esa entidad, toda vez que son rubros que hacen parte de las cotizaciones que hizo el señor ESAUL ARIAS FLOREZ a la AFP ya mencionada.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

De acuerdo con la inconformidad planteada en el recurso de alzada, parecería que el problema jurídico únicamente se circunscribiría a determinar qué haberes le corresponde retornar a la AFP PROTECCION y si sobre estos operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

No obstante, lo anterior conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art.

69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

Es por ello que inicialmente se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación del demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia.

#### 4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad



relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que algunos fondos privados brindaban, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información  <b>ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA EL DEMANDANTE</b>	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1. ° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales

Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3. °, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3. ° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, del recuento realizado, así como del interrogatorio absuelto por el demandante se desprende que para la época de traslado al RAIS, concretamente 13 de abril de 1994 cuando suscribió el formulario de vinculación a COLFONDOS S.A como se puede observar en formulario

SIAFP (fl. 74 del archivo 10 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información** y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía el actor respecto al funcionamiento de ambos regímenes.

Y es que expresamente el señor ESAUL ARIAS FLOREZ en su interrogatorio expuso que es asesor comercial. Afirmó que después de estar afiliado al ISS se vinculó con PROTECCIÓN en el año 1995, NO refiere lo sucedido con Colfondos. Que para aquella época laboró para Prever lo que hoy es Jardines de Montesacro, y que cuando ingresó a laborar le informaron que en esa empresa todos estaban con PROTECCIÓN, por lo que él también se suscribió a dicho fondo. Recuera que el asesor de esa AFP sólo le dijo que los fondos privados eran muy buenos y con mejor rentabilidad, pero sin más detalle y que en todo caso el Seguro Social se iba acabar, aclaró que no tuvo asesoría alguna y que sólo le suministraron los documentos para firmar por lo que su tiempo con el asesor o promotor fue solo de dos a tres minutos. Que le llegan extractos de la cuenta de ahorro individual de pensiones por parte de PROTECCION y que su mayor motivación para retornar al RPM es que se siente preocupado en razón de que algunos de sus conocidos “no han quedado bien pensionados” por lo cual buscó asesoría jurídica.

Destáquese del recuento realizado que, aunque el deponente presenta confusión acerca del fondo primigenio a través del cual se trasladó al RAIS, esto es, COLFONDOS, NO se desprende que en uno u otro evento, haya mediado una explicación completa y clara, menos aun cuando aquel NO contaba con una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema.

En tal contexto, en gracia de discusión, se insiste, NO se vislumbra una suficiente ilustración ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión anticipada en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si el obtener una pensión a una edad inferior es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se les habló de modalidades de pensión, aspecto vital si tenemos en cuenta que en algunas categorías donde existe una renta vitalicia, el riesgo financiero y de longevidad lo corre una aseguradora y no la afiliada por lo que la heredabilidad del capital adquiere otros matices, dado que en caso de muerte ostentando la calidad de pensionado y ante la inexistencia de beneficiarios, el capital de la cuenta de ahorro individual es inexistente al ser utilizado para el pago de una prima única por lo que ningún monto engrosa la masa sucesoral. Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que

tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que tuviese claridad que el monto de la mesada estaba íntimamente ligado al cúmulo de aportes y rendimientos que lograrse alcanzar durante su vida laboral.

Por consiguiente, es claro que era a la administradora del RAIS COLFONDOS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos, inclusive se abstuvo de practicar interrogatorio al actor con el fin de conocer, a viva voz, los motivos de su vinculación a ese fondo. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por el accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión que en este punto es consultada.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso del señor ESAUL ARIAS FLOREZ, quien estuvo en COLFONDOS, luego se trasladó a PROTECCION (FL 76 de la contestación del archivo 10 del expediente digital), última entidad en la que actualmente permanece, pues, de un lado, como antes se resaltó, importa es examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría, cuando existe, NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, aunque ello NO es lo que precisamente sucedió en este caso, en el que más bien se palpa la injerencia del empleador en ese cambio de administradora.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador»

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual del demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS accionada, a trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo

a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se ACLARARÁ la decisión adoptada por la a quo, quien pese a ordenar a PROTECCION devolver el dinero de la cuenta (entiéndase cotizaciones y rendimientos), además de las sumas adicionales y cuotas de administración, última orden que extendió a Colfondos durante su tiempo de permanecía en dicha entidad, NO especificó que el retorno debía incluir del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, retorno que debe efectuar ambas administradoras del RAIS, claro está, respecto del lapso de permanencia en cada uno, pues de lo contrario se estaría efectuando un pago deficitario a Colpensiones.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es PROTECCION S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los rubros que componen los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en COLFONDOS.

Recordemos que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub-lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

En otras palabras, lo procedente es el retorno de la totalidad del dinero recibido por concepto de afiliación, toda vez que no se puede ver afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente al monto total del correspondiente aporte legal.

Respecto a la inconformidad del recurrente atinente a la imposibilidad de retornar las cuotas de administración en tanto a su juicio había operado el fenómeno jurídico de la PRESCRIPCIÓN, habrá de señalarse que ya la Corte se ocupó del tema cuando mediante sentencia de radicación SL2946-2021 emitida el 16 de junio, la M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, reitero que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales así como los derechos que de ella emanen son imprescriptibles, es decir pueden reclamarse en cualquier tiempo. Aunado a ello, en este tipo de procesos no se trata solo de reversar el acto de traslado, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras y administradoras.

En sentencia SL1942-2021 adujo que:

Por último, cumple acotar que no prospera la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, como acertadamente lo dispuso el *a quo*, porque los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden solicitar que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales *en cualquier tiempo*, para que, por esa vía se reconozca a cuál de tales regímenes (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados.

En definitiva, la mentada declaratoria de ineficacia es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social.

Y luego en la SL2208-2021 señaló:

En cuanto a la excepción de prescripción que propusieron las demandadas, debe precisarse que esta Sala ha sostenido reiteradamente que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, ha afirmado que, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en CSJ SL4360-2019).

En tal contexto, no sería dable acoger los razonamientos del recurrente en este punto, máxime cuando no podría desligarse la ineficacia de sus efectos, aduciendo que los derechos derivados de ella no prescriben (retornar a prima media), pero sus consecuencias sí (montos a devolver).

En cuanto a los rendimientos causados, contrario a lo planteado por Protección S.A. en el recurso de alzada, los mismos NO están llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, esta Magistratura considera procedente ADICIONAR el fallo toda vez que la juez omitió indicar que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debía ser entregado a Colpensiones debidamente indexado por parte de Protección y Colfondos,



teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula:  $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$ . Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021<sup>1</sup>, al momento de cumplirse la orden impartida, las administradoras del RAIS accionadas, Colfondos y Protección, deberán discriminar los conceptos cancelados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **ACLARÁNDOLA y ADICIONÁNDOLA** en los aspectos antes aludidos.

Se condenará en costas en esta instancia a Protección S.A. por no haber tenido éxito en el recurso. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 a favor del demandante.

---

<sup>1</sup> Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMA** la sentencia proferida el 25 de octubre de 2021 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **ESAU ARIAS FLOREZ** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.431.637 contra **PROTECCIÓN S.A. COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES**.


**SEGUNDO:** Se **ACLARAN** los numerales segundo y cuarto del fallo bajo el entendido que Protección S.A trasladará a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del demandante, incluyendo también los tres ítems que componen los gastos de administración, última orden que también se extenderá a COLFONDOS S.A. respecto de los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima que recibió durante el tiempo que el actor permaneció afiliado allí, montos que serán debidamente INDEXADOS por todas las administradoras del RAIS accionadas al momento del pago, oportunidad en la que además deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, último aspecto en el que se **ADICIONA** la sentencia, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** costas en esta instancia a cargo de Protección S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 a favor del demandante. Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

(Firmas escaneadas)

Los Magistrados,

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL

  
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante:	<b>ESAUL ARIAS FLOREZ</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.</b>
Radicado No.:	05001-31-05-018-2020-00139-01.
Tema:	Ineficacia traslado
Decisión:	<b>MODIFICA</b>
Fecha de la sentencia:	<b>19/08/2022</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 22/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario